

NEGOCIADO 5º

No habiendo concurrido licitadores á la subasta celebrada el 30 del pasado mes para la adjudicación del servicio de conducción de la correspondencia postal de Arecibo á Ponce por Utuado y Adjuntas, cuyo presupuesto anual asciende á 3,000 pesos, el Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo fecha 2 del corriente ha dispuesto se anuncie la celebración de una segunda subasta, la que se llevará á cabo en la Secretaría de este Gobierno y simultáneamente en las Administraciones de Comunicaciones de Arecibo y Ponce el día 27 del actual, á las diez de la mañana, bajo las mismas condiciones que la comunicada en la GACETA número 121 de 9 del mes próximo pasado.

Lo que de orden de S. E. se hace público en la GACETA OFICIAL para general conocimiento y concurrencia de licitadores.

Puerto-Rico, 7 de Noviembre de 1894.—El Secretario del Gobierno General, José García de la Concha. [1848]

NEGOCIADO 3º

[CONTINUACIÓN.]

Decreto para el arreglo definitivo

DE LA DEUDA NACIONAL

Artículo 56. Las resoluciones de la Comisión liquidataria se harán saber á los interesados en la forma que previene el artículo 50, y si éstos estuvieren conformes, ó bien si en el término de ocho días de notificados no se opusieren, se tendrán por consentidas y se procederá á la conversión por la suma que haya de reconocerse conforme á la respectiva decisión.

Artículo 57. Si en su oportunidad se formulare oposición ante la Comisión liquidataria, se pasará desde luego el expediente á la Secretaría de Hacienda, á la que podrán dirigirse los interesados, exponiendo todo lo que á su derecho convenga en vista de la resolución apelada y dentro del mes siguiente á la fecha de ésta; pero sin que pueda promoverse de nuevo prueba alguna, á no ser que la propia Secretaría acuerde lo contrario.

La decisión del Presidente de la República causará ejecutoria, y todo recurso, de cualquier género que sea, que contra ella se interponga, será desechado de plano, así por las autoridades administrativas como por las judiciales.

Artículos 58. Las resoluciones que se dicten sobre una reclamación en la que se hallen interesados varios partícipes, sean ó no insólidos, y que haya sido presentada por uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, producirá los efectos y tendrá la fuerza de la cosa juzgada en las demás reclamaciones parciales que con posterioridad á dicha resolución presentare cualquiera otro de los co-partícipes.

Artículo 59. Reconocido y liquidado un crédito ó reclamación, se harán los asientos respectivos en un libro que se abrirá con ese objeto, autorizándose cada partida con la firma de uno de los individuos de la Comisión. Se anotarán, además, los libros respectivos de registro, y se librará al interesado una constancia tomada de un libro talonario, para que ocurra á la Tesorería General de la Nación á recibir los bonos que le correspondan. La Comisión liquidataria, la Tesorería y los interesados se sujetarán, en lo que les concierne, á las prevenciones de la Suprema orden de 17 de Noviembre de 1886, y á las relativas que la aclaren ó modifiquen.

Artículo 60. Terminado un expediente, se inutilizarán todos los documentos que lo formen, por medio de un sacabocado que permita la lectura íntegra del texto de dichos documentos.

Si el crédito, título ó reclamación fuere desechado, se devolverán al interesado los documentos respectivos, si éste los pidiere dentro del término de un año, previa inutilización con el sacabocado, y consignándose en la primera y última hoja la razón de haber sido desechado el crédito, título ó reclamación.

Artículo 61. Si los documentos que acrediten la responsabilidad del Gobierno, dimanasen de protocolos de notarios, ó de expedientes ó archivos de oficinas públicas, se cancelarán por cuenta de los interesados, y se anotarán las constancias respectivas en la matriz, antes de expedirse la orden para la entrega de los bonos correspondientes.

SECCION QUINTA.

Del canje de títulos y de las operaciones de la Tesorería.

Artículo 62. La Tesorería General de la Nación hará la entrega de los nuevos títulos, sujetándose á las disposiciones de este decreto y á las instrucciones que le comunique la Secretaría de Hacienda.

Artículo 63. La propia oficina continuará expidiendo los certificados de alcances prevenidos por el artículo 5º de la ley de 14 de Junio de 1883 y la suprema orden de 28 de Mayo de 1886, siempre que lo soliciten expresamente los interesados y que, tratándose de alcances posteriores al 30 de Junio de 1882, no se hallen comprendidos en el artículo 17 de este decreto; pero si dichos certificados, así como los expedidos con anterioridad á este mismo decreto, no fueren conver-

tidos en tiempo oportuno, perderán las prerrogativas que les concede el artículo 6º de la ley de 14 de Junio de 1883.

Esta prevención no obsta para que la Tesorería expida desde luego á los que lo soliciten, los bonos del 3 por 100 de la Deuda Interior consolidada á que tengan derecho, en lugar del certificado de alcances correspondiente.

Artículo 64. Los créditos de la primera y de la segunda categoría de que habla el artículo 5º, que no necesiten depuración, serán convertidos por la Tesorería General, á petición de los interesados, y según los datos que arrojen las respectivas cuentas, siempre que no se trate de los saldos insolutos á que se refiere el artículo 67; pero la conversión de los créditos de la primera categoría no podrá hacerse sin previa resolución de la Secretaría de Hacienda, la que en caso de duda sobre la clasificación que deba hacerse de un crédito conforme al artículo 5º, podrá declararlo comprendido en la primera categoría; pero haciendo al mismo crédito el castigo que estime de justicia, oyendo previamente á los interesados.

Artículo 65. Se entienden que no necesitan depuración, los créditos en los que, estando enteramente conformes los interesados con las cuentas en la Tesorería, así en lo relativo á su importe, como en las demás circunstancias que deban atenderse para la conversión, no hayan sido objeto de observaciones de parte de la misma Tesorería ó de la Contaduría Mayor, ni de órdenes judiciales ó administrativas especiales que suspendan el pago ó fijen condiciones para que éste pueda verificarse.

En estos últimos casos, la Tesorería dará cuenta á la Secretaría de Hacienda, la que resolverá lo conveniente.

Artículo 66. Los tenedores de títulos comprendidos en el artículo 6º del presente decreto, y que deseen acogerse á la conversión, se dirigirán á la Secretaría de Hacienda, á fin de que, previos los trámites á que hubiere lugar, se determine la proporción en que deba hacerse el canje de los nuevos títulos por los antiguos, con arreglo á lo que previene el artículo 11. Una vez determinada esta proporción, la expresada Secretaría no podrá variarla en favor de los demás tenedores de igual clase de títulos, quienes tendrán derecho, cuando quieran acogerse á la conversión, de solicitar directamente de la Tesorería el canje, con arreglo á la base ya establecida.

Artículo 67. Los saldos insolutos de presupuesto por órdenes libradas á favor de pagadores ó habilitados y que por no haberse hecho en la debida oportunidad la prestación ó el gasto respectivos, no hubiesen sido rivalidades en los ejercicios fiscales posteriores, así como los saldos de órdenes libradas á favor de corporaciones, sociedades ó particulares, con el carácter de subvención gratuita ó de auxilio voluntario, ó bien por hechos ó prestaciones que no se hubieren ejecutado, no darán derecho alguno en contra del Gobierno, y tales saldos serán cancelados desde luego por la Tesorería, previa aprobación, en cada caso, de la Secretaría de Hacienda.

Artículo 68. Las operaciones de canje de los títulos que hayan de convertirse en bonos de la Deuda consolidada del 3 p 100, podrán hacerse desde luego; y las aquellos que deben convertirse en bonos de la Deuda Interior amortizable del 5 p 100, se harán desde 1º de Octubre próximo, por certificados provisionales, mientras se imprimen, sellan y firman los títulos definitivos.

(Continuará)

Audiencia Territorial de Puerto-Rico.

SECRETARIA DE GOBIERNO

El Ilmo. Sr. Presidente de este Tribunal, en cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 de Mayo último, ha dispuesto se publiquen en la GACETA OFICIAL de esta Isla, las relaciones que á continuación se expresan, de los Registros de la Propiedad de este territorio, referentes á las instancias presentadas en dichas oficinas para la traslación de asientos de los libros antiguos á los modernos á que se contrae el párrafo 3º del artículo 449 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, á fin de que en el término de cinco días, contados desde dicha publicación, puedan los interesados hacer las reclamaciones de inclusión, que por cualesquiera omisión sean pertinentes, justificándolo por medio del recibo que de las instancias le otorgaran los registradores á los que lo soliciten, y cuyos recibos no tendrán eficacia alguna espirando dicho plazo de cinco días.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto-Rico, 8 de Octubre de 1894.—El Secretario del Gobierno, José M. Velez.

Registro de la propiedad de Humacao.

Relación que se forma en cumplimiento del párrafo 3º del artículo 449 del Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria, para remitir al Sr. Juez de 1ª Instancia de este partido.

124 Octubre 5.—Don Manuel Martín Cabrera y su esposa Doña Lorenza Díaz, Don Jesús Sánchez, Josefa Martínez de Cabrera, Gaspar de Cadilla y Juana

Velazquez, hipoteca por 400 pesos á favor del Convento de San Francisco, sobre una estancia en el sitio de Yabucoa, jurisdicción de las Piedras.

124 Idem idem. Don Benito de la Cruz, hipoteca por 198 pesos 5 reales á favor del Estado, sobre una estancia en el sitio de Montones de las Piedras.

125 Idem idem.—Don Félix y Don José Delgado, Don Pedro Carmona, Ana María Delgado, María Magdalena, Blás López de Alicia y Pascuala Díaz, hipoteca por 550 pesos á favor del Convento de Predicadores de San Juan de Puerto-Rico, sobre una estancia en el sitio de las Piedras y la Montería en Naguabo, jurisdicción de las Piedras.

126 Idem idem.—Don Juan Quiñones, hipoteca por 2276 pesos 7 reales á favor del Convento de San Francisco de la Capital, sobre una hacienda y sus frutos en el barrio del Juncal de Humacao.

127 Idem idem.—Don Diego Villafañe, su esposa Josefa de la Cruz y Pascual Díaz, hipoteca por 500 pesos á favor del Convento de Predicadores de San Juan de Puerto-Rico, sobre una estancia en el sitio de Rio-abajo, término municipal de Humacao.

128 Idem idem.—Don Tomás Aponte y Doña Josefa Prieto, hipoteca por 675 pesos á favor del Convento de Predicadores de San Juan de Puerto-Rico, sobre una estancia en el sitio de Antón Ruiz de Humacao.

129 Idem idem.—Don Baltazar River, hipoteca cuya cantidad no se expresa á favor del Estado, sobre una estancia en el barrio del Duque de Naguabo.

130 Idem idem.—Don José Pujals, fianza por 3000 pesos á favor del Estado, sobre una estancia en el barrio del Río de Naguabo.

131 Idem idem.—Don Andrés Corsino García y su esposa, fianza por 3646 pesos á favor del Estado, sobre una estancia con casa en la jurisdicción de Naguabo.

132 Idem idem.—Don José Gregorio Hernandez y su esposa, fianza por 2000 pesos á favor del Estado, sobre una estancia en el barrio de Maizales, término municipal de Naguabo.

133 Idem idem.—Don José Mariño y Don Hilario García, fianza por 750 pesos á favor del Estado, sobre dos estancias en el barrio de Quebrada-maizales, término municipal de Naguabo.

134 Idem idem.—Don Juan Diego Suarez y su esposa, fianza por 4000 pesos á favor del Estado, sobre una hacienda en el barrio de Peña-pobre de Naguabo.

135 Idem idem.—Don Andrés Corsino García, fianza por 500 pesos á favor del Estado, sobre una estancia en el barrio del Río y Bazo seco de Naguabo.

136 Idem idem.—Don Victoriano de Torres, María O. Maldonado, Julián Rodríguez, Gregorio Arroyo y Eugenia Delgado, hipoteca por 325 pesos á favor del Convento de San Francisco de San Juan de Puerto-Rico, sobre dos estancias, una en el barrio de Peña-pobre de Naguabo y otra en el sitio de Boquerón en las Piedras.

137 Idem idem.—Don José del Río y su esposa Wencesla Tirado, fianza por 500 pesos á favor del Estado, sobre una estancia en el sitio de Sabana de Luquillo.

138 Idem idem.—Don Juan Luis de Rivera y su esposa Doña María Colón, hipoteca 1802 pesos 17 maravedises á favor del Estado, sobre una estancia en el sitio de Las Catas, término municipal de Luquillo.

139 Idem idem.—Don José María Morales y su esposa Luis Vega, fianza por 500 pesos á favor del Estado, sobre una estancia en el sitio de Pita-haya arriba de Luquillo.

140 Idem idem.—Don Sebastián Fornaris, fianza por 3000 pesos á favor del Estado, sobre ocho solares y una estancia en la calle del Marqués en el puerto de los Ucares de Naguabo.

141 Idem idem.—Don José Manuel Calzada, fianza por 200 escudos á favor del Estado, sobre una estancia en el barrio de Sabana, término municipal de Luquillo.

Humacao, seis de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—Feliciano Piñol.

Registro de la Propiedad de Caguas.

Relación de las instancias ingresadas en este Registro hasta el día de ayer, solicitando la traslación de asientos de los antiguos libros, y que no han sido verificadas dentro del plazo que señala el artículo 397 de la vigente Ley hipotecaria.

1 Don Manuel D. Caneja, censo por 78 pesos 75 centavos, reconocido por Don Alonso Gomez á favor del Hospital de Caridad de la Capital, sobre una finca radicada en Caguas.

2 El mismo: censo de 100 pesos reconocido por Don Diego de Santiago á favor de Capellanía, sobre una estancia en Caguas, sitio de Rio-cañas.

3 El mismo: censo de 200 pesos bre una estancia en el partido de Caguas, Cidra, sitio de la Cuchilla, reconocido por Don Sebastián Delgado y su esposa María Ignacia Rodríguez á favor del Monasterio de Carmelitas.

4 El mismo: censo de 200 pesos españoles sobre estancias en el pueblo de Hato grande, reconocido por Don Santiago Roger á favor del Convento de Carmelitas de la Capital.

5 El mismo: censo de 300 pesos españoles constituidos por Don Bernardino Cardona y su esposa Doña Lorenza de Mato á favor del Monasterio de Carmelitas, gravando una estancia situada en el sitio de Celada de